

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita, señor Mario Carroza Espinoza, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dicta sentencia definitiva en la cual, en el aspecto penal, absuelve de los cargos criminales de ser coautores del delito de homicidio calificado de Archivaldo Morales Villanueva, a los acusados Hernán Guzmán Allende y José Valladares Salazar. Asimismo, por su responsabilidad en el mismo ilícito, condena como autor a Eduardo Arriagada Rehren, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, más las penas las accesorias legales, al pago de las costas de la causa y decreta su cumplimiento efectivo al no concederle penas sustitutivas.

En el mismo fallo, en el plano civil, el referido Ministro Instructor, con costas, accede a las demandas formuladas en contra del Fisco de Chile y de Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, condenándolos a pagar en forma solidaria a cada uno de los hijos de la víctima, Josefina Ruth Elena Morales Pinats, Osvaldo Raúl Antonio Morales Troncoso, Guillermo Rafael Archivaldo Morales Pinats, Francisca Teresa Petrouchzka Morales Pinats, Cristian Antonio Arístides Morales González, y a Luis Roberto Morales Rodríguez, representado por su madre Carmen de las Mercedes Rodríguez Vázquez, la suma de \$ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos) y a cada uno de sus nietos, Daisy Marcela Ibarra Morales, Víctor Hugo Toro Morales, Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y a Cristian Orlando Morales Barrientos, la suma de \$7.000.000 (siete millones), sumas reajustables conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha que la sentencia



adquiera el carácter de ejecutoria y, su pago efectivo, con intereses desde que los deudores se constituyan en mora.

Impugnada esa decisión, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de los recursos enderezados en su contra, luego de rechazar el arbitrio formal deducido por la defensa del sentenciado, procede a confirmar con declaración la decisión penal que condenó a Arriagada Rehren, aumentando la pena a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, en tanto que, en el aspecto civil, aumenta a cincuenta millones (\$50.000.000) la suma ordenada pagar a cada uno de los hijos de la víctima, confirmando en lo demás apelado, el referido fallo.

Finalmente, contra esta última sentencia se dedujeron los recursos de casación que pasan a examinarse, todos respecto de los que se ordenó traer los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

I.- EN EL ASPECTO PENAL:

A) EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

PRIMERO: Que, el apoderado del sentenciado recurre de casación en la forma, fundándose primeramente en la causal N° 2 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal.

Sostiene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 del Código de Procedimiento Penal, solicitó en segunda instancia, que se recibiera la causa a prueba, con la finalidad de realizar diligencias que acreditaran la inocencia y nula participación de su representado en el fallecimiento de Archivaldo Morales Villanueva, consistente en la ampliación del peritaje que rola a fojas 1498, con el



objeto de precisar la cantidad de persantin encontrado en las muestras óseas de la víctima y cuál es la cantidad necesaria para provocar un infarto cardiaco; así como también para ofrecer un peritaje e informe realizado por la perito Laura Börgel A., respecto de los usos y consecuencias de la aplicación de dicha droga, solicitando también que se la citara a declarar.

Indica que, su solicitud cumple con los presupuestos que establece el artículo 517 del Código de Procedimiento Penal, el primero de ellos por cuanto los estudios nacionales e internacionales de expertos en la materia, a los cuales dice haber tenido acceso solo después de dictada la sentencia de autos, demuestran que el persantin o dipiridamol -único medicamento administrado por el sentenciado a la víctima- no provoca infartos cardiacos, sino que está indicado para superarlos. Respecto del numeral dos, expresa que el Tribunal de primera instancia, se negó, sin fundamento alguno a ampliar y precisar el informe del Instituto de Médico Legal, privando a su parte de una prueba fundamental, para determinar la culpabilidad o inocencia de Arriagada Rehren, teniendo en consideración que el único motivo para condenarlo fue haber suministrado el referido medicamento a la víctima.

Agrega que, la providencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, relativa a su solicitud de recibir la causa a prueba se limitó a señalar “téngase presente en la vista de la causa” y que, pese a que fue materia de los alegatos, la sentencia de segunda instancia, no se pronunció al respecto, infringiendo lo dispuesto en el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal.

SEGUNDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, para la procedencia de esta



modalidad de invalidación formal relacionada con impedimentos probatorios, es necesario que la recepción de la causa a prueba sea un trámite conducente o procedente. Tendrá tal carácter sólo en los casos taxativos contenidos en los N° 1 y N° 2 del artículos 517 del mismo Código, es decir, *“cuando se alegare algún hecho nuevo que pueda tener importancia para la resolución del recurso, ignorado hasta el vencimiento del término de prueba en primera instancia”* o *“cuando no se hubiere practicado la prueba ofrecida por el solicitante, por causas ajenas a su voluntad; con tal que dicha prueba tienda a demostrar la existencia de un hecho importante para el éxito del juicio”*.

TERCERO: Que, si bien el tribunal no se pronuncia expresamente acerca de las diligencias solicitadas por el recurrente, tal omisión no puede dar origen al vicio de casación en la forma señalado en el N° 2 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, puesto que, en la solicitud presentada al tribunal con ese fin, no se alega ningún hecho nuevo ignorado hasta el vencimiento del término de prueba en primera instancia, toda vez que la misma solicitud de ampliación de peritaje, la realizó el recurrente en un otrosí de su escrito de contestación de la acusación, la que fue desestimada por el tribunal.

Por lo demás, tampoco se trata de una prueba que oportuna y legalmente fuera ofrecida en primera instancia y que no se practicó por causas ajenas a su voluntad.

Respecto de la solicitud de peritaje y la declaración de la profesional de la salud que indica, no hay constancia que la defensa del reo haya realizado durante toda la tramitación del proceso alguna solicitud en tal sentido, siendo de su carga solicitar las diligencias que estime pertinentes para desvirtuar el mérito del sumario



o establecer las circunstancias que le puedan favorecer, de tal manera que la recepción de la causa a prueba ante la Corte de Apelaciones no resulta procedente.

Atendió lo expuesto, el recurso de casación formal será desestimado.

CUARTO: Que, como segunda causal de casación formal, invoca aquella prevista en el numeral 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 500 N^{os} 3, 4 y 5 del mismo código.

En cuanto al numeral tercero, sostiene, en síntesis, que éste busca que el sentenciador exponga, aunque sea de modo breve y sintético, con claridad y precisión los hechos sometidos a su decisión, en un relato que reúna las características de coherencia, claridad y suficiencia de información y datos, antecedentes de los que adolece la sentencia recurrida, por cuanto no señala, ni de manera genérica, la forma en que el medicamento utilizado le habría ocasionado la muerte a la víctima, adoleciendo de una explicación razonada y suficiente de la eventual participación de su representado en los hechos.

En lo que dice relación con el numeral cuarto, indica que la descripción de los hechos resulta insuficiente para atribuir participación dolosa a su representado, además de adolecer de imprecisiones relevantes y de no hacerse cargo de los argumentos de la defensa, en orden a la absolución de Arriagada Rehren.

Finalmente, respecto del numeral quinto, expresa que la sentencia realiza una errada calificación del delito y sus circunstancias, puesto que es evidente que fue la aplicación de tormentos y torturas y no la administración del medicamento, lo que condujo, necesariamente, como causa primaria, a la muerte de Archivaldo Morales.



Por esta causal solicita que se anule la sentencia y se dicte la correspondiente de reemplazo que absuelva a su representado.

QUINTO: Que, previo a entrar al análisis del recurso, conviene precisar aquellos hechos asentados en la instancia, los cuales están puntualizados en el considerando segundo del fallo de primer grado y que el Tribunal de Alzada mantiene, a saber:

1. – Que, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, el Departamento II que oficiaba de Unidad de Inteligencia en el Regimiento N° 19 “Colchagua” de la ciudad de San Fernando, estableció un sistema de trabajo planificado, organizado y jerarquizado, destinado a identificar, detener y destruir física y moralmente a personas consideradas de alta connotación política, participantes y/o simpatizantes del depuesto Gobierno de Salvador Allende Gossens;

2. - Este Departamento II solo rendía cuenta diaria de su quehacer al Coronel Hernán Erantes Martínez, quien estaba al mando del Regimiento N° 19 “Colchagua” y actualmente se encuentra fallecido, el que para lograr los fines propuestos resuelve intervenir el cuartel de Investigaciones y entregarle el mando al Oficial de Ejército Capitán Manríquez Pearson, también fallecido, quien sería finalmente el que utilizaría los recursos materiales y humanos de dicha policía para que colaboraran en las detenciones e interrogatorios, aplicándoles a los civiles normas del estado de guerra y para ello se habilitan las instalaciones del Regimiento como lugar de encierro e interrogación, junto a la unidades de la Cárcel Pública y el Cuartel de Investigaciones, desde donde los prisioneros eran llevados a la presencia del Fiscal Judicial de la época.



3. - Que así las cosas, el día 26 de septiembre de 1973, Archibaldo Morales Villanueva, locutor de Radio San Fernando, es detenido junto a su amiga Eva Valiente Espinoza, en el domicilio de esta, ubicado en calle Curicó N° 33, segundo piso, departamento A de la ciudad de Santiago, por la Prefectura Móvil de Servicios Especiales de la Policía de Investigaciones, a propósito de una orden emanada del entonces Capitán de Ejército Ricardo David Manríquez Pearson, Oficial interventor y encargado del Cuartel de la Policía de Investigaciones de San Fernando, que respondía al mando del Coronel Erantes.

5.- Que ambos detenidos permanecieron en Santiago en el Cuartel de Investigaciones, hasta que fueron trasladados a la ciudad de San Fernando el día 29 de septiembre de mismo año, oportunidad en que ingresan a la guardia de dicho cuartel de la VI Región, alrededor de las 13:00 horas.

El detenido Archibaldo Morales, conocido en la zona como “Chito Morales”, una vez que es interrogado se le traslada hasta la Cárcel Pública de San Fernando, donde permanece incomunicado alrededor de 43 días, sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar, que para esos efectos se había constituido en el Regimiento N° 19 “Colchagua”, a cargo del Fiscal Militar Juan Ramírez Rojas.

6 - Un día del mes de octubre, alrededor de mediodía, un grupo de detenidos esperaba ser interrogado por el Fiscal Ramírez y a Archibaldo Morales se le mantenía en la guardia del Regimiento, con indicios evidentes de haber sido torturado , y al querer incorporarse a la fila de los detenidos para ser interrogado, se desvanece y hubo que llevarle a la enfermería del recinto militar, donde sería atendido por el Médico del Regimiento, el Oficial de Sanidad e integrante del



Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), doctor Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, quien luego de examinarlo, adopta la decisión de inyectarle vía endovenosa un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle una reacción del infarto al miocardio que sentía , pero Morales Villanueva producto de ese fármaco se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal, esto es:

"Considerando el resultado del examen toxicológico que estableció la presencia de barbitúricos y de persantin (dipiridamol) en las muestras óseas de Archibaldo Morales Villanueva, no puede descartarse la participación de terceros en los eventos que determinaron la muerte de la víctima, toda vez que el afectado se encontraba dentro de un recinto penitenciario, por lo menos 43 días previos a su deceso. Que la muerte de Archibaldo Morales Villanueva se produce encontrándose este en calidad de detenido y bajo custodia de agentes del Estado, por lo que su fallecimiento corresponde clasificarse -desde un punto de visto médico legal- como una muerte en custodia". El certificado de defuncion senala como causa de su muerte Paro Cardíaco e Infarto al miocardio el día 12 de noviembre de 1973 a las 13:10 horas".

A juicio de los sentenciadores de instancia, tales hechos descritos configuran la existencia del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal.

SEXTO: Que sobre la responsabilidad del acusado Arriagada Rehren, el fallo recurrido, tal como se lee de su considerando noveno, no modificado en alzada, expresa que el medicamento que el sentenciado le inyectó a la víctima,



era un fármaco que el Servicio de Salud de la zona de O'Higgins no poseía, sino que es él quien lo proporciona y lo justifica por ser médico general de zona y debido a la escases de medicamentos que existía en esa época. Agregando en su considerando décimo que: *"Que el resultado del examen toxicológico a los restos exhumados de la víctima de autos, Archibaldo Morales Villanueva, estableció sin lugar a dudas la presencia de barbituricos (pentotal) y del citado medicamento persantin (dipiridamol), que demuestran la participación de terceros en los eventos que determinaron la muerte de la víctima, especialmente porque era de conocimiento de todos, que este se encontraba privado de libertad al menos 43 días previos a su deceso, por lo mismo queda en evidencia que la muerte de Archibaldo Morales Villanueva se produce encontrándose este prisionero y bajo custodia de agentes del Estado, y por ello, su fallecimiento es calificado -desde un punto de vista médico legal como muerte en custodia.*

La presencia de dipiridamol y también de barbitúricos ratifican esta aseveración, porque el primero de los fármacos es un vasodilatador coronario actualmente utilizado para realizar electrocardiograma de esfuerzo a personas incapacitadas de realizar actividad física, que en el caso de ser administrado erróneamente puede llegar a producir una angina (infarto al miocardio), es entonces una sustancia que requiere administración médica supervisada, debido al riesgo de provocar esta reacción adversa. Y en lo relativo a los barbitúricos (pentotal), es un medicamento utilizado en cuadros neurológicos de tipo epilepsia y ocasionan sedación, lo que en un contexto de prisión y encierro, que el legista afirma documentado en la bibliografía, resulta ser un medicamento que produce el



efecto en el prisionero que lo inhabilita para filtrar alguna de la información que este entregando en un interrogatorio.

Se ha señalado con toda claridad, en cuanto a la causa de muerte de la víctima, que "en patología forense está documentado que existe una causa o entidad que lleva a la muerte conocida como miocardiopatía asociada al estrés, que significa que en condiciones de estrés externo como dolor físico y miedo intenso, se puede desencadenar un evento de falla de irrigación adecuada del corazón que determine un infarto miocárdico." En este caso en particular está el registro de que llevaba 43 días privado de libertad, circunstancia que el acusado no desconocía, aunque no le inhibe para administrarle de igual forma dipiridamol, a sabiendas que en ese contexto el medicamento podía provocar un cuadro anginoso y llevar a la víctima a la muerte.

Agrega el fallo de primera instancia en su considerando undécimo que: "En efecto, el acusado Eduardo Arriagada Rehren siempre estuvo consciente del tiempo de encierro en que se mantuvo a Archibaldo Morales en el Regimiento, no solamente porque una de sus asistentes era su pareja y le consultaba por él, sino porque lo conocía como periodista, ya que este continuamente criticaba en su medio la labor que desarrollada para la comunidad el Hospital de Chimbarongo, en el cual Arriagada era Director, tampoco desconocía las consecuencias que una sustancia como el dipiridamol obtenía en una persona que se encontraba en condiciones de estrés externo como dolor físico y miedo intenso, y que ineludiblemente le desencadenaría un evento de falla de irrigación adecuada del corazón y por consiguiente, la muerte inminente, pero eso no lo detuvo e igual



intencionalmente aplica el medicamento Persantin con su principio activo, que por lo demás solamente el manejaba y administraba.

Su labor posterior como integrante de los servicios de inteligencia, investigador de productos bacteriológicos y el hecho de habersele encontrado trazos de barbitúricos a los restos exhumados de la víctima, medicamentos utilizados en interrogatorios, determinan que no solo hubo la denominada muerte en custodia y responsabilidad de agentes del Estado, sino que existió de parte del acusado Arriagada voluntad maliciosa en su conducta profesional como médico, al suministrar al prisionero medicamentos que irreparablemente causarían lesiones gravísimas que lo llevarían a su deceso posterior, lo cual demuestra que su conducta es objeto de reproche penal y tiene matices de una participación culpable y penada por la ley de autor de homicidio calificado”.

SÉPTIMO: Que, por su parte, el fallo de segundo grado agrega en el párrafo penúltimo de su considerando décimo noveno que: *“El acusado aplicó sus conocimientos en el diagnóstico y en la administración del fármaco, y que como se expresa en la sentencia, el hecho de que aún permanezca en los restos de la víctima, demuestra que la cantidad inoculada fue a todas luces excesiva, considerando las condiciones físicas de aquella, conocida por Arriagada, por lo que no resulta aceptable lo alegado por su defensa, en el sentido de que se limitó a actuar en su calidad de médico, no existiendo dolo homicida, y que la prueba resulta vaga y contradictoria, pues contrariamente a esta aseveración, los antecedentes allegados al proceso y de los cuales se ha dado cuenta, son coherentes, lógicos, consistentes e inequívocamente conducen a la convicción a que llega el tribunal a quo”.*



OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, aparece de manifiesto que la afirmación efectuada por el impugnante Arriagada Rehren en su arbitrio, carece totalmente de sustento, toda vez que los sentenciadores del grado explicitaron los fundamentos conforme a los cuales se determinó su participación en el ilícito investigado, refiriéndose especialmente a la actividad desarrollada por el sentenciado consistente en haberle suministrado un medicamento en altas dosis, conociendo que el estado en el que se encontraba la víctima, podía ocasionarle la muerte.

De lo expuesto, aparece con claridad que la sentencia materia del recurso, dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal le compele, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen, motivo por cual se desestimaré la causal de nulidad formal en análisis.

B) EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

NOVENO: Que, la misma defensa, recurre de casación en el fondo, basado en la causal número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, en específico, denuncia la infracción de los artículos 391 N°1, circunstancia tercera del Código Penal y los artículos 456 bis, 485 y 488 del Código de Procedimiento Penal.

Alega una vaguedad en la descripción de los hechos que conectan a su representado con el homicidio, puesto que la aplicación de la inyección no fue la causa directa del fallecimiento de la víctima. Indica que hay un relato incompleto de los hechos y una ausencia de ponderación de la prueba, puesto que sólo se han tomado en cuenta aquellas versiones que perjudican a su representado, las



que, por lo demás, son escasas y están fundadas en dichos de personas que carecen de objetividad.

Estima que, el análisis realizado en la sentencia respecto de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la víctima resulta erróneo, puesto que se encuentra acreditado que Archivaldo Morales Villanueva fue sometido a torturas, vejámenes y malos tratos y que, los antecedentes probatorios dan cuenta de que incluso la víctima se desvaneció y vomitó, mientras se encontraba en la fila para ser interrogado por el Fiscal Militar, antes de ser llevado a la presencia de su representado, por lo que estima se ha realizado una calificación errada del delito y sus circunstancias, ya que es evidente que fue la aplicación de tormentos y torturas lo que condujo, necesariamente, como causa primaria, a la muerte de Archivaldo Morales y no el actuar de su representado.

Termina solicitando que se declare la nulidad del fallo y se dicte sentencia de reemplazo que absuelva a su representado por falta de participación.

DÉCIMO: Que, la causal que se invoca (infracción a la ley reguladora de la prueba), si se esgrime aisladamente y no se le vincula con otra de las causales de invalidación que prevé el artículo 546 del Código Procesal Penal, debe ser desestimada. En efecto, si lo que se pretende es que se altere el sustrato fáctico del fallo impugnado, es menester que conjuntamente se enarbole otro de los motivos de nulidad que dicho precepto consagra, por cuanto la sola mutación de los hechos no permite que este tribunal de casación pueda hacer uso de sus facultades invalidatorias determinando, de oficio, cuál de aquellas otras causales – taxativamente señaladas en el estatuto procesal del ramo- que denoten una



errada aplicación de la ley corresponde hacer concurrente, lo que resulta suficiente para desestimarlos.

A mayor abundamiento, cabe señalar que si bien el recurrente cuestiona la valoración ejecutada por los jurisdicentes, señalando que ella vulnera las leyes reguladoras de la prueba y no permitiría alcanzar a la conclusión condenatoria arribada, más allá de esta afirmación, en ninguna parte de su arbitrio se desarrolla de manera adecuada la forma en que se afectaron dichas normas de valoración, construyendo el reclamo en afirmaciones tan generales como las que observa en el fallo y que, en realidad, buscan que esta Corte efectúe un ejercicio vedado para esta sede, cual es una nueva valoración de los medios probatorios que, por lo demás, fueron debidamente valorados por los sentenciadores de instancia.

En este sentido, no está demás mencionar que los jueces de instancia son soberanos en torno a la fijación de los hechos y con ello, a la Corte Suprema, le está negada su revisión y se le obliga a aceptarlos, siempre y cuando no exista una vulneración palmaria y flagrante sobre alguna ley reguladora de la prueba que, como dispone el motivo de casación, influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, lo que no acontece en la especie.

Con lo dicho, es posible concluir que el recurso pretende la ejecución de una tarea que ya fue efectuada en ambas instancias, entregándose razones legales para adoptar la decisión que ahora se cuestiona, pero que, en concreto, se sustenta en un ejercicio privativo de los jueces y en los que no se observan los vicios que se les endilga a ellos, debiendo así ser desechado el recurso presentado.

II.- EN EL ASPECTO CIVIL:



UNDÉCIMO: Que, por la casación sustancial, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, denuncia como vulnerados los artículos 2 N° 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la ley N° 19.123, y artículos 19 y 22 inciso 1° del Código Civil. Se sostiene por el recurrente que el error consistió en dejar de aplicar la normativa especial de la ley N° 19.123, que rige para el caso de autos el ejercicio de acciones de indemnización por daño moral, al rechazar la excepción de exclusión legal de familiares más lejanos opuesta por el Fisco de Chile, al contestar la demanda.

Señala que la indemnización de daño moral solicitada por los nietos de la víctima se desenvuelve en el escenario de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En dicho escenario, la ley N° 19.123 constituyó un esfuerzo de reparación trascendental, pues compatibilizó reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero, preferentemente en cuotas mensuales, con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, mes a mes, obtengan una reparación, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Agrega que esta forma de pago ha significado un monto de indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, a lo que se suman otras prestaciones de transferencias directas en dinero, por una sola vez, contempladas en las leyes N° 19.123 y N° 19.980, que favorecieron también a familiares directos, esto es, a padres, cónyuges e hijos, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, a quienes se las excluyó.



Indica que, lo anterior tiene, además, una justificación natural, pues las relaciones de parentesco más lejanas, ya fuera del núcleo familiar de la víctima, como son los nietos, tienen una distancia temporal respecto de ella, donde en muchos casos tenían una muy corta edad a la época en que ocurrieron los hechos o simplemente no habían nacido. En efecto, tal como lo señala la propia demanda, cuatro de los nietos de la víctima, Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristián Orlando Morales Barrientos no habían nacido a la época en que ocurrieron los hechos. Por su parte, los actores Daisy Marcela Ibarra Morales, Víctor Hugo Toro Morales tenían 3 años de edad y 11 meses de edad respectivamente a la fecha de muerte de la víctima, lo que explica los motivos del por qué fueron preteridos legalmente respecto de las indemnizaciones pecuniarias que beneficiaron al entorno más cercano, sin perjuicio de las otras medidas de reparación establecidas por el Estado de Chile a través de las diversas leyes y actos de reparación que se han sucedido desde el retorno a la democracia.

Por todo lo anterior, solicita anular el fallo impugnado en lo respectivo a la acción civil deducida por Daisy Marcela Ibarra Morales, Víctor Hugo Toro Morales, Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y don Cristián Orlando Morales Barrientos, procediendo a dictar otra de reemplazo que revoque la de primera instancia y niegue lugar a la demanda deducida en autos a su respecto, en todas sus partes.

DUODÉCIMO: Que, a efectos de un adecuado análisis de la controversia que motiva al presente recurso, se hace necesario dejar asentado, que fueron hechos de la causa en primera y segunda instancia que, la muerte de Archivaldo



Morales Villanueva se produjo encontrándose éste en calidad de detenido y bajo custodia de agentes del Estado. En efecto, se tuvo por acreditado que la víctima fue detenida el 26 de septiembre de 1973 en Santiago; que el 29 de septiembre del mismo año, fue trasladado a la ciudad de San Fernando; que luego de interrogado fue trasladado a la Cárcel Pública, donde permaneció incomunicado por cerca de 43 días, sufriendo apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar, constituida en el Regimiento N° 19 “Colchagua” y, que, el 12 de noviembre de 1973, luego de que Eduardo Arriagada Rehren le inyectara un medicamento compuesto por dipiridamol, falleció como consecuencia de un infarto agudo al miocardio, tal como da cuenta su certificado de defunción.

Debido a lo anterior -en lo que interesa al presente recurso- sus nietos, Daisy Marcela Ibarra Morales, Víctor Hugo Toro Morales, Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos, demandaron al sentenciado y al Fisco por la suma de \$50.000.000, por concepto de daño moral, con reajustes, intereses y costas, o la suma que el tribunal estime en justicia.

La sentencia de primer grado -en lo que interesa- accedió parcialmente a la demanda, condenando al Fisco de Chile y a Eduardo Adolfo Arriagada Rehren, al pago de una indemnización, a título de daño moral, ascendente a \$7.000.000, a cada uno de sus nietos, con los reajustes e intereses que precisa, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

DÉCIMO TERCERO: Que corresponde, entonces, analizar el recurso deducido, resultando necesario tener en consideración que la pretensión indemnizatoria sostenida por los actores – nietos de la víctima -, no ha sido



construida con base en los estatutos especiales de reparación contenidos en las Leyes 19.123 y 19.980, los cuales dispusieron compensaciones económicas y beneficios sociales en favor de las personas que dicha legislación precisa. Por el contrario, lo pretendido es la reparación, a título de daño moral, del padecimiento personal sufrido como consecuencia de la muerte de Archivaldo Morales Villanueva a manos de agentes del Estado, haciendo responsable al Fisco por la vía de la responsabilidad extracontractual que le asiste, derivada de la falta de servicio y, engarzada la normativa interna con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la materia.

DÉCIMO CUARTO: Que, de la lectura de la demanda civil, se advierte que la pretensión indemnizatoria sostenida por los actores recurrentes ha sido construida sobre la base de la reparación, a título de daño moral, del padecimiento personal sufrido como consecuencia de la muerte y quiebre familiar de Morales Villanueva, en el caso de los demandantes Daisy Marcela Ibarra Morales y Víctor Hugo Toro Morales -de 3 años y 11 meses de edad a la época del fallecimiento- y el haber nacido en una familia marcada por dicha pérdida -respecto de Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos - haciendo responsable al recurrente por la vía de la responsabilidad extracontractual que le asiste, derivada de los hechos ilícitos objeto del juicio perpetrado en contra de su familiar y, relacionando la normativa interna con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la materia.

DÉCIMO QUINTO: Que, sin embargo, no debe olvidarse que la pretensión indemnizatoria que se admite en sede penal conforme a lo dispuesto en la última



parte del inciso final del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal -de acuerdo a su actual redacción-, presenta como única limitación *“que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”*, lo que significa una exigencia en el campo de la causalidad, en términos que el fundamento de la pretensión civil deducida, debe emanar de las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal.

En la especie, tal vínculo de causalidad no parece satisfecho en el caso, toda vez que no son las conductas ilícitas investigadas en autos -cometidas por agentes del Estado- las que subyacen y originan la pretensión civil de estos querellantes y demandantes, sino el haber nacido dentro de una familia afectada por la desaparición de uno de sus integrantes, Archivaldo Morales Villanueva, así como la conducta dispensada por los hijos de éste para con los demandantes, todos nietos del afectado, nacidos en su mayoría con posterioridad a la ocurrencia de los hechos luctuosos objeto de juzgamiento, a excepción de Daisy Marcela Ibarra Morales y Víctor Hugo Toro Morales, a la sazón, de 3 años y 11 meses de edad, respectivamente.

Al respecto cabe señalar que, el daño moral que se pretende sea indemnizado ha de estar suficientemente demostrado, lo que no acontece en la especie, por cuanto, el daño que se ha alegado respecto a estos actores, no tiene relación causal con los hechos delictuales perpetrados en contra de la víctima, sino más bien se funda en el trato que les fuera dispensado por los demás integrantes del grupo familiar, a quienes la sentencia recurrida ha mandado indemnizar, y no directamente por la pérdida Morales Villanueva, por lo que



Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos, no se encuentran favorecidos por el régimen especial de competencia contemplado en la ley.

En consecuencia, la falta de nexo causal que ha sido advertida entre los delitos objeto del juicio y el daño alegado y acreditado en relación a Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos, nietos de la víctima objeto del proceso-, conlleva el éxito del recurso el examen, pues la ausencia de relación causal torna en improcedente la acción indemnizatoria intentada, respecto de aquellos, por lo que el recurso deducido por el Fisco de Chile, será acogido.

Cosa distinta acontece respecto de Daisy Marcela Ibarra Morales y Víctor Hugo Toro Morales, hijos de la descendiente mayor de la víctima -de 18 años a la fecha de la ocurrencia de los hechos, separada- respecto de los cuales Morales Villanueva, desempeñaba el rol de padre, por lo que su muerte intempestiva, a pocos días de la última vez que estuvieron con él, lógicamente les causó el dolor y aflicción que solicitan sea indemnizada.

DÉCIMO SEXTO: Que, en esas condiciones, resulta efectivo que los jueces del grado incurrieron en un error de derecho al momento de acoger la demanda civil incoada por Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos, yerro que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, de suerte tal que el recurso de casación en el fondo será acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16, y 391 N°1 del Código Penal, 10, 500, 535, 541, 546 y 547 del Código de



Procedimiento Penal, y 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se decide:**

I. EN LO PENAL

1.- **Se rechazan** los recursos de casación en la forma y en el fondo impetrados por el abogado Pablo Berwart Tudela, en representación del sentenciado Adolfo Arriagada Rehren.

II. EN LO CIVIL

2.- **Se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, en contra de la sección civil de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la que se anula parcialmente y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

Rol N° 88.739-2021

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Sr. Jean Pierre Matus A., la Ministra Suplente Sra. Dobra Lusic N., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorlari G., y Andrea Ruiz R. No firman la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Tavorlari, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente respectivamente.



JEAN PIERRE MATUS ACUÑA
MINISTRO
Fecha: 04/11/2024 13:20:06

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL
MINISTRO(S)
Fecha: 04/11/2024 13:20:06

ANDREA PAOLA RUIZ ROSAS
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/11/2024 13:20:07



En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción, en su considerando trigésimo primero, de la referencia que se hace a los nietos de Morales Villanueva.

De la sentencia de casación que precede, se reproducen los motivos décimo cuarto y décimo quinto.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º) Que, conforme al fallo que se revisa, el juez de instrucción decide otorgar a los demandantes civiles Daisy Marcela Ibarra Morales, Víctor Hugo Toro Morales, Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos, nietos de la víctima de estos autos, una indemnización de perjuicios equivalente a siete millones de pesos.

2º) Que, sobre el daño moral, cabe señalar que este tipo de perjuicios no es de naturaleza pecuniaria y que su objetivo es procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido. En ese entendido, al momento de regular el monto de la indemnización, debe considerarse que aquel nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe buscar atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extra patrimonial sufrida. Por lo que el juez, al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda.



3º) Que en relación a la demanda civil deducida por Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos, cabe tener en cuenta que el daño moral que se pretende sea indemnizado ha de estar suficientemente demostrado, en particular si se trata de familiares cuya existencia legal es posterior a la fecha de los hechos delictuosos establecidos, caso en el cual el estándar probatorio exigido para justificar el padecimiento que pretenden sea reparado por el Estado debe ser mayor y, en la especie, los lazos y dependencia afectiva que invocan respecto de la persona de la víctima no fue demostrado, resultando insuficiente para ello las declaraciones de Ema Toro Arancibia, María Paz Correa Tapia y Teodoro Valdés Ramírez, que rolan a fojas 2200, 2204 y 2208, puesto que ellas se refieren en forma genérica a los daños producidos al grupo familiar, por lo que la acción ejercida carece de sustento fáctico para concederles una reparación.

4º) Que, cosa distinta sucede con los demandantes civiles Daisy Marcela Ibarra Morales y Víctor Hugo Toro Morales, respecto de los que se encuentra acreditado que tenían 3 años y 11 meses a la fecha de fallecimiento de la víctima, los que tenían un estrecho contacto con su abuelo materno, el que ocupaba el rol de padre a su respecto, por lo que el criarse sin la presencia de un abuelo, muerto en las circunstancias que su madre les ha debido transmitir y verse enfrentados al evidente dolor de desarrollar sus vidas sin el apoyo afectivo y patrimonial que este podía brindarles, antecedentes que en su conjunto permiten tener por cierto la existencia de un daño extrapatrimonial que debe ser resarcido en toda su extensión, es decir, ha de ser proporcional al perjuicio y derivarse necesariamente



del hecho que lo genera, límites que en este caso se satisfacen con la prueba rendida.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 178, 180 y 186 del Código de Procedimiento Civil y artículos 2314 y 2329 del Código Civil se resuelve:

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

I.- Se revoca la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, escrita a fojas 2.721 y siguientes, en la parte que condena a pagar a cada uno de los demandantes Lorena Edith Toro Morales, Paz Daniela Morales Morales, Natalia Andrea Morales Barrientos y Cristian Orlando Morales Barrientos, la suma de siete millones de pesos (\$7.000.000), más los reajustes e intereses que indica el fallo, y en su lugar se decide que la acción ejercida por estas personas queda rechazada

II.- Se confirma, en lo demás, la referida sentencia.

Estimándose que los demandantes han tenido motivo plausible para litigar, se las exime del pago de las costas.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 88.739-2021

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Sr. Jean Pierre Matus A., la Ministra Suplente Sra. Dobra Lusic N., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorari G., y Andrea Ruiz R. No firman la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra.



Tavolari, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente respectivamente.

JEAN PIERRE MATUS ACUÑA
MINISTRO
Fecha: 04/11/2024 13:20:09

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL
MINISTRO(S)
Fecha: 04/11/2024 13:20:09

ANDREA PAOLA RUIZ ROSAS
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/11/2024 13:20:10



En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

